

Señor

JUEZ VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Sección Segunda

E.

S.

D.

REFERENCIA : Contestación de Demanda
PROCESO N° : 11001 33 35 027 2020 00293 00
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
DEMANDANTE : Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)
DEMANDADA : CECILIA LINARES DE ACOSTA

VICTOR HUGO ARCILA VALENCIA, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.070.869 de Manizales (Caldas), abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 148.902 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la señora CECILIA LINARES DE ACOSTA, identificada con la C. C. No. 20.096.574 de Bogotá D.C., igualmente mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, de conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, estando dentro de la oportunidad legal para el efecto, presento contestación de demanda dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS

Son ciertos todos los hechos relacionados en la demanda.

II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la Entidad demandante y así mismo solicito a su señoría que las mismas sean denegadas por cuanto la reliquidación de la pensión Gracia por retiro definitivo del servicio, realizada a favor de mi representada mediante resolución 000427 del 17 de enero de 2000, expedida por la extinta CAJANAL, se encuentra conforme a derecho.

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO

De conformidad con el numeral 3° del artículo 175 del CPACA - Ley 1437 de 2011 -, formulo las siguientes excepciones de mérito.

1. Ausencia de vicio del acto administrativo demandado.

Mi representada radicó el día 06 de enero de 1999, ante la extinta -CAJANAL-, una solicitud de reliquidación de su pensión de GRACIA, a fin de que le tuvieran en cuenta los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su retiro definitivo del servicio, valga la pena resaltar, haciendo uso del formulario dispuesto por la Entidad para este fin, como da cuenta el expediente digital a folio 59.

Esta solicitud la hizo, amparada en la confianza legítima de estar plenamente convencida que le asistía el derecho, ya que, para esta época, la Entidad realizaba esta reliquidación debido a que esta era su posición institucional, es decir, de entrada se descarta alguna maniobra fraudulenta o engañosa por parte de mi representada para obtener su reliquidación por retiro definitivo del servicio.

2. Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido:

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la reliquidación realizada a mi representada mediante resolución N° 000422 del 17 de enero de 2000, expedida por la extinta -CAJANAL-, se encuentra reconocida conforme a la ley, la suma que reclama la entidad demandante a título de restablecimiento del derecho, se encuentra alejada de la realidad, pues todos los dineros recibidos por parte de mi representada, por concepto de mesadas pensionales, las ha recibido como consecuencia de un derecho reconocido de acuerdo a la normatividad y el precedente judicial vigentes para la época.

3. Excepción Genérica:

En virtud de lo establecido en el Art 282 C.G.P y del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del juez en necesario afirmar que lo fundamental no es la relación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la prueba de los mismos, por ende, si el juez encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

Por lo anterior, solicito al señor juez ordenar de oficio la práctica de las pruebas pertinentes, así como declarar oficiosamente, las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

IV. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA

Reliquidación de la Pensión Gracia por Retiro Definitivo del Servicio. Línea Jurisprudencial del Consejo de Estado.

Con anterioridad al año 2004, el Consejo de Estado, en pronunciamientos de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se indicaba que "(...) teniendo en cuenta que la pensión se comienza a devengar cuando se cumplen los requisitos legales para obtenerla, es lógico que por último año de servicios se entienda el inmediatamente anterior a esa fecha.[Sin embargo] tratándose de la pensión gracia que se adquiere por los servicios docentes, el último año que sirve de fundamento para su liquidación es aquel

en el cual se desempeñó como tal¹. Se consideró su procedencia inclusive en casos que al pensionado se le hubiese pagado factores salariales posteriormente al reconocimiento pensional, pues para esos efectos *"(...) se debe atender a lo realmente causado, esto es a lo devengado y, tratándose de liquidar la pensión gracia, debe tenerse en cuenta todo lo devengado por el beneficiario durante el último año de servicios"*².

En sentencia de la Subsección B del 24 de junio de 2004 con ponencia del Consejero Tarsicio Cáceres Toro, expediente 5707- 03, se precisó que la referida reliquidación resultaba procedente pues, si bien era un caso excepcional dado que los docentes se encontraban habilitados para devengar pensión ordinaria y gracia sin tener que retirarse del servicio, *"Entonces, es factible que cuando finalmente el docente decida retirarse del servicio su remuneración sea diferente a la que percibía cuando "adquirió y se le reconoció la pensión"; por eso, asimilando esta reclamación al régimen ordinario pensional, que se liquida por lo devengado en el último año de servicio, es viable esta reclamación y teniendo en cuenta que para la PENSION DE JUBILACIÓN GRACIA no se aplican los factores antiguamente señalados en las Leyes 33 y 62 de 1985"*.

Se destaca que la posición institucional de la extinta CAJANAL era la de considerar que si tenían derecho a tal reliquidación, en consideración al precedente judicial relacionado anteriormente, es por ello que los docentes accedían a la misma en sede administrativa, sin necesidad de adelantar un proceso judicial.

Sin embargo, para ese mismo año 2004 al interior de la Subsección B de la mencionada Sección se empezaron a adoptar posturas opuestas respecto de la posibilidad de reliquidar la pensión gracia con los factores devengados durante el año anterior al retiro del servicio, precisamente con ponencia del Consejero Tarsicio Cáceres Toro, en sentencia del dos de septiembre de ese mismo año, en el expediente 4581-03 se dijo lo siguiente:

"La Sala - en esta instancia- respecto de esta pretensión (reliquidación de la pensión de jubilación gracia con los valores de los factores pensionales devengados durante el último año de servicios previo al retiro definitivo) considera:

Se advierte que durante un tiempo esta Jurisdicción admitió que la pensión de jubilación gracia se reliquidara por los factores devengados por el docente al momento de su desvinculación del servicio.

Sin embargo, reconsideró la situación por cuanto el docente cuando cumple los requisitos de la pensión de jubilación gracia (status pensional) se le hace un RECONOCIMIENTO DEFINITIVO PENSIONAL y entra a gozar de la prestación, aún sin su retiro del servicio, por

¹ De esa Subsección de la Sección Segunda en sentencia del 20 de marzo de 1997, con ponencia de la Consejera Clara Forero de Castro. Exp. 13221. En ese mismo sentido, de esa Subsección en sentencia del 28 de noviembre de 2002 con ponencia de la Consejera Ana Margarita Olaya Forero, Exp. 1962-02.

² De esa Subsección, en sentencia del 15 de marzo de 2001 con ponencia del Consejero Alberto Arango Mantilla, Exp. 00980-01. En el mismo sentido, de esa misma Subsección, la sentencia del 19 de mayo de 2005 con ponencia del mencionado Consejero. Exp. 2522-04

autorización legal que comprende una excepción a la prohibición de recibir más de un emolumento a cargo del Tesoro Público.

Además, dicha pensión se reajusta año tras año conforme a las leyes de tal alcance. Y, por último, no existe disposición legal que ordene la Reliquidación pensional de los docentes, teniendo en cuenta el último y definitivo año de servicios, más cuando la liquidación se hace con los requisitos y situaciones al momento de adquirir el derecho pensional.

No es dable, por lo tanto, pretender en esta prestación especial la aplicación del artículo 9º de la Ley 71 de 1988 sobre reliquidación de la pensión con base en el salario devengado en el último año de servicio, pues la situación que contempla dicha preceptiva comporta una situación diferente, como quiera que se trata de empleados del régimen prestacional común para los cuales no está permitido el goce simultáneo de pensión y sueldo y que no es el caso de la pensión de jubilación -gracia la cual está sometida a un régimen especial" (Negrilla del texto y subraya fuera del texto).

Además de las razones esgrimidas, en la sentencia de esa misma Subsección, del primero de julio de 2004, con ponencia del Consejero Jesús María Lemos Bustamante, Exp. 5478-03, se presentaron otras, como que la pensión gracia no requiere afiliación a la Caja Nacional de Previsión Social, ni hacer aportes para su adquisición y goce, por lo tanto no puede liquidarse tomando en cuenta el último año de prestación de servicios, como lo dispone la ley 33 de 1985, normatividad, de la cual se encuentra excluida la pensión gracia; además, que la liquidación sobre los factores salariales devengados en el último año de servicios, es procedente pero para la pensión ordinaria de jubilación conforme lo dispuesto en el artículo primero de la ley 33 de 1985.

Principio de la buena fe y confianza legítima:

Como lo mencioné anteriormente, la señora CECILIA LINARES DE ACOSTA, radicó solicitud de reliquidación de pensión GRACIA por retiro definitivo del servicio, debido a que para la época la extinta CAJANAL despachaba favorablemente esta solicitud, razón por la cual, ha tenido el convencimiento fundado y razonable de que su pensión GRACIA se debía reliquidar al retiro del servicio.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de buena fe y confianza legítima consagrado en el artículo 83 de la Constitución ampara al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades, por lo que resulta contrario a este principio que la autoridad judicial aplique un cambio abrupto, inesperado y repentino a quien acudió a la justicia amparado en el precedente judicial aplicable que ha sido reiterativo y uniforme³. Así se ha pronunciado la Corte Constitucional:

"9. El derecho, como instrumento de ordenación social, pretende regular ciertos aspectos de las relaciones humanas, estabilizándolos.

³ Tomado de sentencia del 25 de septiembre de 2015, Tribunal Administrativo del Quindío, Proceso: 63001-2333-000-2014-00216-00, Magistrado Ponente: Juan Carlos Botina Gómez.

Cualquier comunidad política que pretenda organizarse como tal a partir del derecho requiere para tal fin, que sus miembros tengan cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad. En una sociedad altamente compleja como lo es el Estado contemporáneo, caracterizada por un aumento en la intensidad y en la variedad de la actividad social, el nivel de certeza requerido respecto de la protección social de determinadas conductas es mayor. Nuestra forma de organización político jurídica protege a todas las personas, imponiendo a las autoridades la obligación de garantizar la efectividad de los derechos y deberes (C.P. artículo 2º), a través del derecho, como sistema estable de ordenación social. Sin embargo, en un Estado contemporáneo, establecido como social de derecho, en el cual la labor de creación del derecho es compartida, la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes. En nuestro Estado actual, es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la que puedan contar los administrados y que cubra también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Sólo así se puede asegurar la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2º)

(...)

La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley.

(...)

10. En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non valet. En efecto, si esta máxima se predica de la actividad del Estado en general, y se extiende también a

las acciones de los particulares, donde –en principio– la autonomía privada prima sobre el deber de coherencia, no existe un principio de razón suficiente por el cual un comportamiento semejante no sea exigible también a la actividad judicial.⁴ **El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado⁵ como administrador de justicia.⁶ Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.**

En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una conducta estatal, entendida ésta en términos más amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción⁷.” (Subrayados fuera del texto)

Por lo anterior, es claro que la señora CECILIA LINARES DE ACOSTA, acudió a la administración pública, con el convencimiento fundado y razonable de que su pensión de vejez debía ser liquidada con los factores salariales devengados en el último año de servicios, por lo que no se puede revocar este reconocimiento, so pena de violar el principio constitucional al aplicar un cambio jurisprudencial de manera abrupta, en contra de sus intereses.

Prohibición de reclamar dineros pagados de buena fe:

La señora CECILIA LINARES DE ACOSTA, cobró los dineros reconocidos en virtud de la resolución N° 000427 del 17 de enero de 2000, expedida por la extinta CAJANAL, mediante la cual se reliquidó su pensión GRACIA con los factores salariales devengados en el último año de servicios, con el claro convencimiento que los mismos estaban reconocidos conforme a derecho, porque además así lo fueron, ya que, tal como se ha manifestado en precedencia, dicha reliquidación la realizó la Entidad en sede

⁴ La Corte ha referido la prohibición de venirse contra el acto propio y el principio de la confianza legítima tanto a las autoridades estatales, como a los particulares. Refiriendo este principio a la actuación de la administración, ver Sentencias T-475/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-578/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), entre otras. Refiriéndolo a la actividad de los particulares ver: Sentencia T-503/99 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-295/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), entre otras.

⁵ La Corte ha definido el principio de la confianza legítima (...) Sentencia C-478/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

⁶ Aplicando el principio de la confianza legítima en relación con las autoridades judiciales, ver Sentencia T-321/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Así mismo, la Sentencia T-538/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) estableció la aplicación de este principio respecto del servicio de administración de justicia y de la actividad judicial diciendo: (...) La administración de justicia, a través de las diferentes instancias, debe corregir sus propios errores, pero no a costa del sacrificio del legítimo derecho de defensa de los sindicados y menos escarmentando la buena fe que ellos razonadamente hayan puesto en los actos de las autoridades. Los dictados de la buena fe se ignoran al obrar con tan máxima severidad y dar lugar a iniquidad manifiesta. En definitiva, para corregir el error judicial - falencia interna del servicio de administración de justicia - no era necesario sacrificar de manera tan palmaria el derecho de defensa del sindicado (CP art. 29) y considerar falta suya el haber confiado razonadamente en la autoridad pública (CP art. 83)."

⁷ C-836/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

administrativa, pues esta era su posición institucional de acuerdo con el precedente judicial vigente para la época.

Al respecto, considero pertinente traer a colación reciente sentencia del Consejo de Estado de fecha 08 de febrero de febrero de 2018. Radicado Nro. 52001-23-33-000-2012-00067-01. (interno 3507-2015). MP. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, en la cual se afirma:

"En lo que concierne a este aspecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 164 numeral 1º literal c) prevé: "(...) no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe".

La Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 2004 al declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma que también disponía que la administración no podía recuperar las sumas pagadas a particulares de buena fe) consideró frente a la facultad que tiene el Estado de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas que:

"En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar "en cualquier tiempo" los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que "no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe". Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. [...]".

El artículo 164 numeral 1º literal c) del CPACA se lee en consonancia con el artículo 83 de la Constitución Política que señala: "[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

La buena fe es uno de los principios generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 2004, quien agrego:

"En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades

*discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico*¹⁴.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia de tutela del 8 de junio de 2017 consideró sobre la buena fe simple que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, y corresponde al Estado desvirtuarla. Dijo la Corte:

"Nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el régimen civil han desarrollado además del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones.

[...]

De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obró con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea éste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jurídicamente una situación determinada. Así, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realización actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza".

Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que en derecho contencioso administrativo si bien el Estado tiene la facultad de pedir la nulidad de los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador impone un límite, consistente en que no puede recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Por consiguiente, corresponde al Estado probar que el beneficiario de la pensión actuó de mala fe al solicitar el reconocimiento o la reliquidación pensional.

Esta Subsección en sentencia del 23 de marzo de 2017, analizó la buena fe en un caso de similares condiciones fácticas al presente, donde explicó¹⁵:

"De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno.

El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta".

Sentencia del Consejo de Estado de fecha 17 de octubre de 2017, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación: 70001-23-33-000-2015-00202-01 (NI: 4729-2016) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, Demandado: María Raquel Castilla Barrios.

(...) "Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para devolución de prestaciones periódicas."

La jurisprudencia de esta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona correcta (vir bonus)"⁽¹⁰⁾. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada"⁽¹¹⁾.

En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario⁽¹²⁾. Principio éste que además, no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros⁽¹³⁾. En este sentido, no es posible entender el principio de la buena fe de manera aislada y como un fin en sí mismo, por cuanto se debe concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos concretos encerrados, o como una simple mescolanza de normas, sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción⁽¹⁴⁾.

Bajo el anterior razonamiento es preciso traer a colación algunos pronunciamientos de esta Sección sobre el principio constitucional de la buena fe, en lo que se refiere a pagos efectuados por error de la administración:

"Ahora bien, el principio constitucional de la buena fe, se encuentra contemplado por la Carta Política, en su artículo 83, en los siguientes términos:

"ART. 83. — Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". Pese a que dicha norma es aparentemente clara, es fundamental considerar que la naturaleza jurídica de la buena fe como principio general del derecho, implica que su vinculación a patrones fácticos específicos, es muy amplia y compleja y solo puede ser explicada en la medida en que se tenga clara la noción de buena fe.

La buena fe, como principio general del Derecho, es el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión o la rectitud de una conducta. Exige, entonces, una conducta recta u honesta en relación con las

partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad.

El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la Administración y a su vez ésta puede confiar en el ciudadano; confianza que en todo caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o psicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas. El numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone:

"Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe" (Negrillas del texto).

"Añade la corporación que si se aceptara el reconocimiento de la pensión decretada por la Resolución 002341 de 1993, dentro de los 20 años de servicio exigidos para ese efecto, se estaría tomando tiempo de servicios que el departamento del Tolima tuvo en cuenta para reconocer la pensión de jubilación a cargo de la Caja de Previsión de esa entidad territorial. Por ende, la Sala declarará la nulidad de la resolución acusada 2341 de 1993.

Sin embargo, ella considera que **no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales** que han sido pagadas a la señora (...), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, **pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe**, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la pensión actuó de mala fe y ello no ocurrió así"⁽¹⁵⁾. Subrayado fuera del texto.

En el mismo sentido se indicó: "La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos (\$610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$565.965,64).

Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

No obstante lo anterior, **la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante** y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados". ⁽¹⁶⁾ (El resaltado es de la Sala).

La tesis fue reiterada posteriormente así: "Por último como el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. dispone que "Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe", igualmente deberá confirmarse en este sentido la decisión

apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, **por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto** ⁽¹⁷⁾. (resaltado fuera del texto).

Como se infiere de la norma transcrita, se exige para la devolución de prestaciones periódicas por parte de los particulares, la demostración de su mala fe, pues la buena fe en sus actuaciones es una presunción constitucional; es decir, la demostración de que los particulares hubiesen asaltando la buena fe para hacerse acreedores a una prestación a la que no tenían derecho.

Observa la Sala, que la Resolución 0405 de 7 de noviembre de 1991, creó a favor del demandando una situación jurídica de carácter particular y concreto, en la medida en que le reconoció el pago de una suma específica, por concepto de pensión mensual vitalicia de jubilación, que por lo mismo, ingresó a su patrimonio, y no obstante no corresponder a la legal, estando la administración en la obligación de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo; lo cierto es, que la demandante incurrió en error al reconocer la suma que debía pagar al pensionado, equívoco en el que no tuvo participación el titular del derecho, lo que confirma, que si la Administración, fundada en su propia negligencia, pretende la devolución de las sumas pagadas en exceso, como en este caso, vulnera de manera franca el principio de la buena fe del gobernado.

Lo anterior aunado al hecho, de que en el transcurso del proceso, no se afirmó ni se demostró que el demandado hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación.

(...).

Con lo anterior, los pagos efectuados por la universidad tienen amparo legal, porque fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el principio de la buena fe" ⁽¹⁸⁾.

Precisa la Sala que ésta clara línea jurisprudencial se ha mantenido para los casos en que se han recibido prestaciones periódicas tales como la pensión de jubilación producto de un error de la administración.

La posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe" (...)

Por todo lo expuesto anteriormente y dejando claro que mi representada no ha participado de ninguna maniobra fraudulenta en el reconocimiento de su reliquidación por retiro definitivo del servicio, no hay lugar dinero alguno, por cuanto los mismos se encuentran recibidos conforme a derecho, en virtud de un acto administrativo expedido en debida forma.

V. NOTIFICACIONES

Mi representada las recibirá en la ciudad de Bogotá D.C., Carrera 73 N° 152B – 65, conjunto residencial Ébano, Torre 2 Apartamento 303. Celulares: 3204901702 – 3153153889. E-mail: caritoacosta797@gmail.com

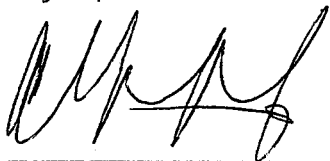
El suscrito apoderado las recibirá en la ciudad de Bogotá D.C., Calle 26A N° 13 – 97 Oficina 801. Teléfono: 9278209. Celular: 3213915709. E-mail: victor.arcila@gestionjuridicagroup.com

VI. ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes:

a) Poder legalmente conferido por la demandada para su representación y actuación procesal.

Del señor juez,



VICTOR HUGO ARCILA VALENCIA
C. C No. 16.070.869 de Manizales (Caldas)
T. P. No. 148.902 del C.S. de la J.

Señor
JUEZ VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Sección Segunda
E. S. D.

REFERENCIA : Otorgamiento de Poder
PROCESO N° : 11001 33 35 027 2020 00293 00
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
(Lesividad)
DEMANDANTE : Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
(UGPP)
DEMANDADA : CECILIA LINARES DE ACOSTA

CECILIA LINARES DE ACOSTA, identificada con la C.C. No. 20.096.574 de Bogotá D.C., mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, manifiesto a usted respetuosamente que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor VÍCTOR HUGO ARCILA VALENCIA, abogado en ejercicio, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., también mayor de edad, identificado con la C.C. N° 16.070.869 de Manizales (Caldas) y portador de la T.P. N° 148.902 del C. S. de la J, para que me represente en el proceso de la referencia, actualmente tramitado en este juzgado.

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la Entidad demandante y así mismo solicito que las mismas sean denegadas por cuanto mis derechos pensionales se encuentran reconocidos en debida forma.

Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de conciliar, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

Este poder incluye la facultad de interponer los recursos ordinarios y extraordinarios.

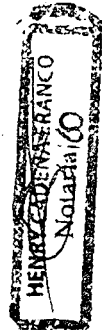
Sírvase señor juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Atentamente,

Cecilia Linares de Acosta
CECILIA LINARES DE ACOSTA
C.C. No. 20.096.574 de Bogotá D.C.

ACEPTO

Víctor Hugo Arcila Valencia
VÍCTOR HUGO ARCILA VALENCIA
C.C. N° 16.070.869 de Manizales (Caldas)
T.P. N° 148.902 del C. S. de la J.



Notaría 60

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En el despacho de la Notaría Sesenta del
circulo de Bogota, D.C., el día 2021-04-29
15:54:39
se presentó



LINARES DE ACOSTA CECILIA

quien se identificó con la

C.C. 20096574

y dijo que reconoce el anterior documento
como cierto, y que la firma es de su puño y
letra. Igualmente reconoce como suya la
huella dactilar del índice derecho que a
continuación se estampa

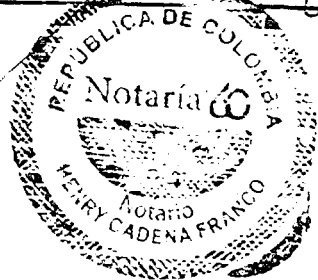


X

FIRMA

HENRY CADE
NOTARIO 60 DEL CIRC.

ANCO
BOGOTÁ



Notaría 60

EN ESTE DOCUMENTO NO SE
UTILIZÓ EL SISTEMA PSOMATICO
DE IDENTIFICACION

1. FALSA CLERICAL
2. FALSA DE CONTINUIDAD
3. FALSA DE CLERICAL
4. FALSA DE CLERICAL
5. FALSA DE CLERICAL
6. FALSA DE CLERICAL
7. FALSA DE CLERICAL